

Revista de Derecho

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

- - UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN - -

Dirección y Administración: ANIBAL PINTO 1 - CASILLA 49

Año II — Concepción (Chile), Noviembre de 1934 — N.º 8 y 9

SUMARIO

Editorial.

Aporte a un estudio.

Prof. Boris Shatzky

La repudiación de la cláusula de dollar-oro en los Estados Unidos.

Dr. Ramón Carranca y T.

El psicoanálisis en el examen de los delincuentes.

Rolf. F. Siebel J.

El derecho internacional de las obligaciones.

NOTAS UNIVERSITARIAS.— *Los cursos del Profesor Boris Shatzky.*

NOTAS AL MARGEN.— Helmuth Brünner N. «*El delito de omisión ante las nuevas doctrinas del Derecho Penal*». «*La especialización de los magistrados*».

REVISTA DE REVISTAS.— «*Locus regit actum*».— «*La crónica roja o policíaca en los diarios*».— «*El régimen de la libertad de prensa*».— «*El juicio oral en Argentina*».— «*Quedan abolidos los tormentos*».— «*Extraña causa de divorcio*».— «*Inhumación*».— «*Los libros*».

JURISPRUDENCIA.— «*Es válida la escritura suscrita por el solo deudor mutuario*».— «*De quienes pueden alegar la nulidad relativa*».— «*Tramitación de la demanda sobre restitución de especies*».— «*Es válido el poder conferido en el extranjero para comparecer en juicio*».— «*Del valor de la confesión del reo*».— «*La indemnización de perjuicios*».— «*Del momento en que nace el derecho real hipotecario*».— «*Exigibilidad de las obligaciones contraídas en moneda extranjera*».— «*De la apreciación de la prueba en materia penal*».

NOTAS AL MARGEN

LEYES Y DECRETOS

La indemnización de perjuicios

DOCTRINA.— Para que pueda condenarse a una persona a pagar perjuicios, cuya indemnización se persiga en juicio ordinario, es absolutamente indispensable comprobar que ha sido precisamente el demandado el autor de los perjuicios, que se ha beneficiado con ellos, y que el demandante ha sufrido un perjuicio efectivo.

JURISPRUDENCIA.— Corte de Apelaciones de Concepción.— 8 de Agosto de 1934.

CITAS LEGALES.— Artículos 1555, 1556 y 1558 del Código Civil.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Considerandos de la sentencia de primera instancia:

“Considerando respecto de la tacha formulada a fs. 96, contra el testigo Bernabé Barrales:

1.º) Que la circunstancia de haber declarado dicho testigo a fs. 172 vuelta del cuaderno principal en el sentido de que había procedido a hacer una volteada de árboles en el terreno materia de la querella, por orden de los querellados Arrau y Monat, no implica que Barrales tenga interés directo o indirecto en el pleito y por tanto no le es aplicable la inhabilidad contemplada en el N.º 6 del artículo 347 del Código

de Procedimiento Civil.

Considerando respecto del incidente formulado a fs. 98:

2.º) Que al fijarse en la minuta de la parte que presentó al testigo Lucas Cuevas Ruminot, a fs. 75, como domicilio de éste la quinta subdelegación de Carampangue y al manifestar dicho Cuevas, en su declaración de fs. 100 que su domicilio lo tiene en Curanilahue pero que sus trabajos agrícolas los tiene al lado Norte del río Curanilahue, es decir, en la quinta subdelegación de Carampangue y que tiene allí una casa habitación no es antecedente suficiente para estimar que la lista de la parte querellada no cumple con la imposición del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil;

Considerando respecto de la incidencia formulada a fs. 111.

3.º) Que el término probatorio de ocho días, decretado a fs. 58 vta., empezó a correr el día 17 de Junio de 1926, fecha en que fué notificada a las partes el “cúmplase” de fs. 72, y que por decreto de fs. 79 vta., se amplió el término probatorio por diez días.

4.º) Que en consecuencia, la

prueba rendida en Concepción, con fecha 6 de Julio del mismo año, y que rola a fs. 111 y siguientes lo ha sido dentro del término ampliado.

Considerando, respecto de la indemnización de perjuicios reclamados:

5.º) Que en el libelo de fs. 1 se cobra como indemnización de perjuicios la suma total de novecientos cuarenta y tres mil setecientos veinticinco pesos, que la parte querellante descompone en la siguiente forma: Por la madera cortada para minas novecientos veintiocho mil ciento veinticinco pesos; por madera de pellín extraída para las basas cuatro mil doscientos pesos; por madera de raulí, cinco mil seiscientos pesos, por carbón de madera mil pesos, por destrucción de montañas para abrir caminos, tres mil pesos; por destrucción del cerco divisorio, mil ochocientos pesos;

6.º) Que según se desprende de las posiciones absueltas por el querellado, don Domingo Oyharcabal, a fs. 183 del cuaderno principal, el número de palos cortados en el terreno materia de la querella, fué de un mil quinientos por día;

7.º) Que la parte querellante no ha acreditado el número de días durante los cuales se

hizo la corta de palos ni ha producido antecedentes suficientes para establecer el lugar de la corta;

8.º) Que para estimar este último punto no bastan los hechos reconocidos por el absolvente don Domingo Oyharcabal en cuanto al precio de la venta obtenido ni al precio del transporte de los palos hasta la estación de Curanilahue, puesto que sería necesario conocer el valor del capital invertido en bueyes, carretas, material de explotación, etc., para obtener el valor exacto de cada palo, colocado en el lugar de la corta;

9.º) Que atendida la prueba testimonial rendida por la parte querellada, es equitativo dejar en cuarenta centavos el valor de cada palo y en ciento veinte días el período de explotación de la madera en el terreno materia de la querella durante todo el tiempo que éste permaneció en poder de los querellados;

10.º) Que, por tanto, es equitativo fijar en setenta y dos mil pesos el valor de los perjuicios ocasionados por la cortadura de madera para minas;

11.º) Que si bien el querellante ha pretendido acreditar que se han cortado palos de pellín y de raulí, la prueba rendida por los querellados en el

La indemnización de perjuicios

115

sentido de que no existía esta clase de maderas en el terreno explotado, parece más conforme con la verdad de los hechos, por provenir de testigos que dan razón de sus dichos y han trabajado en el terreno mencionado;

12.º) Que valorizando la prueba rendida por ambas partes acerca del roce de bosques y de fabricación de carbón de madera debe estimarse en doscientos pesos los perjuicios por tales capítulos por el querellante;

13.º) Que respecto del corte de bosques para abrir caminos, ha quedado establecido el hecho con la prueba testimonial de la parte querellada y la inspección ocular que rola a fs. 218 del cuaderno principal, como asimismo ha quedado establecido la destrucción de un cerco divisorio y considerada la prueba rendida por la parte querellante que es superior a la del querellado, deben estimarse en tres mil y un mil ochocientos pesos, respectivamente los perjuicios ocasionados por tales capítulos. Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo presente lo prescrito en los artículos 1698 y 1713 del Código Civil, y 151, 374, 389, 302, 410 y 431 del Código de Procedimiento Civil, se

declara: a) Que no ha lugar a la tacha opuesta por la parte querellante al testigo Bernabé Barrales; b) que no ha lugar a la incidencia formulada por el querellante a fs. 98; c) que es válida la prueba rendida por la parte querellada a fs. 111 y siguientes; y d) que los querellados deben pagar al querellante la suma de sententia y siete mil pesos por el total de los perjuicios reclamados. No se impone la condenación en costas por haber tenido ambas partes motivo plausible para litigar. —Anótese y agréguese las estampillas.— HECTOR R. MOENA.— ROMULO REBOLLEDO L., secretario”.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Concepción, ocho de Agosto de mil novecientos treinta y cuatro.

Reproduciendo la sentencia de primera instancia menos los fundamentos 6.º a 10.º, 12 y 13, que se eliminan y teniendo, además presente:

1.º) Que la parte demandante formuló la incidencia de fs. 111 a fin de que se declare nula la prueba de testigos que depusieron en Concepción el seis de Julio de mil novecientos veintiseis, por haberlo hecho

fuera de término;

2.º) Que con fecha ocho de Abril de mil novecientos veinticinco se recibió la causa a prueba por el término de ocho días, fijado por la ley para los incidentes, resolución que apelada al siguiente, antes que empezara a correr el probatorio, y confirmada el 28 de Abril de 1926 se ordenó cumplirla, y se la notificó a las partes, el 17 de Junio del mismo año, principiando, por consiguiente, ese día a correr el probatorio;

3.º) Que por resolución de 23 de Junio citado se amplió en 10 días el probatorio que venció el 26 de ese mes, lo que hace que, principiando a correr ese día la ampliación, los testigos que declararon el 6 de Julio de ese año, lo hicieron dentro del término, y por tanto, son válidas sus declaraciones;

4.º) Que por el capítulo de madera para minas cortada y, extraída del predio materia de la restitución, cobran los demandantes como perjuicios la suma de \$ 928.125.—;

5.º) Que para probarlo rindieron las declaraciones de los testigos Dagoberto Rizzo, Teodoro Cuevas, Benicio Núñez y Miguel Sanhueza que dicen que desde los primeros días siguientes a la fecha de los hechos, 17 de Febrero de 1917, los deman-

dados principiaron a sacar carretadas de esos palos en número de veinte a veinticinco cada día, que después aumentaron hasta cien, y que en el verano llegaron a 200 carretadas y más por día, llevando 30 palos en cada una;

6.º) Que los demandados, a su vez, presentaron los testigos Bernabé Barrales, Lucas Cuevas, David González, Honorino Moraga, Mercedes Toledo y Miguel Mella, para establecer que las carretadas que diariamente sacaban de esos palos, no pasaban de 30 con 20 palos cada una, testigos éstos, cuyos dichos deben prevalecer sobre los de la parte demandante por ser mayor el número;

7.º) Que para calcular la cantidad de palos extraídos, precisa determinar el número de días trabajados, ya que las partes se han servido para ello de las carretadas tiradas por día, puesto que naturalmente, deben descartarse los días festivos y de lluvia, o que por otro motivo no se hubieren podido trabajar;

8.º) Que los demandantes omitieron rendir prueba sobre el particular, por lo que habrá de estarse a la producida por los demandados, al tenor de la articulación de su minuta, según la cual esos días fluctuaron

La indemnización de perjuicios

117

entre ochenta y ciento veinte por año, debiendo por ello tomarse el término medio de cien días de trabajo efectivo al año, término que se conforma además con las declaraciones de Bernardo Barrales y Marcial Recart;

9.º) Que habiéndose efectuado la restitución el nueve de Noviembre de mil novecientos dieciocho, esto es un año, ocho meses y veintitres días después de consumarse el despojo, es equitativo estimar en ciento sesenta los días trabajados, ya que los demandados debieron tardar algún tiempo en organizar los trabajos, y desde que la restitución se efectuó, sin que aprovecharán la Primavera y el Verano del segundo año, que es el tiempo apropiado para estas faenas;

10.º) Que también es dato indispensable para la resolución de la cuestión debatida saber el valor que cada palo tenía, y si bien Dagoberto Riffo y Miguel Sanhueza dicen que esos palos se vendían a las minas a razón de treinta centavos el metro lineal, sus declaraciones no producen prueba al respecto por no dar razón de sus dichos, ni están los demandados obligados al pago de otro valor que el que la madera tenía puesta en la mata, que fué de donde la to-

maron;

11.º) Que atendido lo expuesto por Lucas Cuevas, Daniel González y Emilio Grant, cabe estimar prudencialmente el valor de cada palo para minas puesto en la mata, en diez centavos, importando por tanto los 80.000 que se habían extraído, según lo ya demostrado, la suma de ocho mil pesos;

12.º) Que estos datos no se alteran con las posiciones absurdas por los demandados don Benjamín Arrau y don Domingo Oyharzabal, que por lo demás, sólo pueden afectar a los absolventes;

13.º) Que por el capítulo de árboles gruesos de roble-pellín y de raulí se cobran nueve mil ochocientos pesos, perjuicios que se pretenden acreditar con las declaraciones de Dagoberto Riffo y Miguel Sanhueza, que, en fs. 81 vta. y 93 dicen constarles que se cortaron más de cien de cada clase de esos árboles, con el valor de seis pesos cada metro, sus dichos no constituyen prueba por no dar razón de lo declarado;

14.º) Que, a lo anterior se agrega, que los demandados justifican con los testigos Barrales, Cuevas, González, Moraga, Toledo y Meila, que en el predio sólo se explotaron palos redondos para minas;

15.º) Que por carbón, hecho en un roce de cuatro a cinco cuadras, se demanda la suma de un mil pesos, correspondiente a más de quinientos sacos, cargo que se justifica plenamente con las declaraciones de Riffo, Teodoro y Polisario Cuevas y Miguel Sanhueza, que vieron la pila de carbón y la estimaron en más de esa cantidad, y la de Eulogio Peña, que igualmente la vió, si bien no la sabe estimar;

16.º) Que sus dichos prevalecen sobre los de Lucas Cuevas, González, Moraga, Toledo y Mella, que creen no se haya hecho carbón, porque la casa Duhart lo prohibía siendo además, de advertir que los demandados reconocen en la articulación 12 de su minuta que se hizo, sosteniendo únicamente que fueron los inquilinos y en cantidad no superior a cincuenta sacos;

17.º) Que, por una faja cortada en el terreno con un largo de 35 cuadras por tres metros de ancho se cobran tres mil pesos por perjuicios, faja que Riffo, Cuevas, Núñez, Polidoro Cuevas y Sanhueza, atestiguan haberse hecho y aprecian en esa cantidad;

18.º) Que, esto no obstante, la parte demandada ha probado con las declaraciones de Ba-

rrales, Cuevas, González, Moraga, Toledo y Mella, al contestar la articulación novena de su minuta, que la cuadra de suelo, con montaña, no tiene en el lugar un valor superior a setenta pesos, lo que se conforma con el avalúo de la propiedad, pues en mil novecientos diez y seis, todo el fundo "Las Quemadas", del cual forma parte del que es materia del juicio, se hallaba avaluado en ciento cuarenta y cinco mil pesos, según recibo corriente a fojas ciento treinta, del cuaderno principal, y hoy, lo está en doscientos cuarenta y cuatro mil pesos, como se vé en el certificado de fs. 161;

19.º) Que, por ello, el perjuicio con motivo de las fajas que ocupan una cuadra más o menos de extensión, no puede ser superior a cincuenta pesos;

20.º) Que, asimismo se cobran mil ochocientos pesos con motivo de la destrucción de un cerco de tranqueros y tranquilas y aunque los testigos Riffo, Cuevas, Núñez, Polisario Cuevas y Sanhueza confirman la destrucción de ese cerco y su valor, ninguno asevera que lo hubieran hecho destruir los demandados, por lo cual no puede hacérseles responsables de ese daño. De acuerdo también con lo dispuesto por los artículos 1437, 1555, 1556 y 1558 del

La indemnización de perjuicios

119

Código Civil, 93 y 322 del de Procedimiento Civil se confirma en la parte apelada la referida sentencia de diez y nueve de Junio de mil novecientos veintiocho, escrita a fojas ciento veinticuatro, con declaración de que se reduce a la suma de nueve mil cincuenta pesos el monto de los perjuicios que, los querellados, el Obispado de Concepción, la Junta de Beneficencia de Santa Juana y la Junta de Beneficencia de Concepción deben pagar a los querellantes con ocasión de los he-

chos que motivan este juicio. — Devuélvase. — Complétese el impuesto que corresponden a las fojas 138, 146 y 162. — Redacción del señor Ministro Muñoz. — G. BRAÑAS MAC GRATH. — CONSTANTINO MUÑOZ. — JOSE ARANCIBIA A. — Dictada por los señores Ministro en propiedad de la Ilma. Corte, don Gonzalo Brañas M. G., don Constantino Muñoz y don José Arancibia A. — ALBERTO SANHUEZA C., Secretario".

Del momento en que nace el derecho real hipotecario

DOCTRINA.— La hipotecación es un contrato complejo, que incluye el otorgamiento por escritura pública y la inscripción posterior en el Registro Conservatorio, siendo este último requisito el que dá valor legal a la hipoteca y hace nacer el derecho real hipotecario. En consecuencia, no hay objeto ilícito ni nulidad consiguiente en el otorgamiento de una hipoteca sobre un bien raíz que estaba embargado a la fecha de extenderse la escritura pública si este embargo había sido alzado al momento de inscribirse la hipoteca.

CITAS LEGALES.— 1464, 2387, 2407, 2408, 2409, 2410, 2412, 2414, 2415, 2420, 2428, 2429, 1448, 1698, y 2132 del Cod. Civil; 486 (Núms. 7 y 14, 493, 500 y 933 del Cod. de Proc. Civil.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

"Temuco, cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y uno.

Considerando:

1.º) Que la ejecutada ha opuesto la excepción contemplada en el N.º 7.º del art. 486 del Código de Procedimiento Civil, falta de requisitos para que el título tenga fuerza ejecutiva. Y esa excepción debe